

# Economía, política y militar de Estados Unidos Políticas hacia El Salvador, 1926-2026: Un siglo de compromiso y consecuencias estructurales

Generado por: Asistente Legal de  
IA. Facilitado por: Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc.

4 de febrero de 2026

© 2026 Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Generado por un Asistente Legal de IA. Con la colaboración del Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Todos los derechos reservados.

## POLÍTICAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y MILITARES DE ESTADOS UNIDOS HACIA EL SALVADOR, 1926-2026: UN SIGLO DE ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN Y CONSECUENCIAS ESTRUCTURALES

### Resumen ejecutivo

La relación de Estados Unidos con El Salvador durante el último siglo revela un patrón constante de intervención estratégica diseñada para proteger los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses, a menudo a expensas del desarrollo democrático y la estabilidad social salvadoreños. Este informe examina tres ámbitos políticos interrelacionados —económico, político y militar— a lo largo de cinco épocas históricas distintas, desde 1926 hasta principios de 2026.

La evidencia demuestra que las políticas estadounidenses, aunque enmarcadas en términos de anticomunismo, democratización o cooperación en materia de seguridad, han transformado fundamentalmente las estructuras institucionales, los patrones de dependencia económica y las condiciones sociales de El Salvador de maneras que aún se perciben hoy. Solo entre 1980 y 1992, Estados Unidos proporcionó más de mil millones de dólares en asistencia militar al gobierno salvadoreño, entrenando a fuerzas que posteriormente fueron responsables de abusos sistemáticos contra los derechos humanos, incluida la masacre de El Mozote.<sup>[10][19]</sup> El posterior impulso hacia la dolarización en 2001 eliminó la capacidad de El Salvador para establecer una política monetaria independiente.<sup>[3]</sup> Más recientemente, las políticas de deportación estadounidenses desde 1996 han establecido inadvertidamente redes criminales en El Salvador que ahora desestabilizan el país, mientras que la participación actual de Estados Unidos con la administración cada vez más autoritaria de Bukele ha apoyado tácitamente el retroceso democrático.<sup>[31]</sup> <sup>[32]</sup> Los impactos de estas políticas abarcan desde el desplazamiento interno masivo durante la guerra civil hasta las crisis migratorias en curso y la violencia de pandillas que continúa empujando a los salvadoreños hacia el norte, hacia Estados Unidos. Este informe sostiene que para comprender los desafíos contemporáneos de El Salvador es necesario reconocer cómo un siglo de decisiones estratégicas de Estados Unidos ha limitado las alternativas políticas, la autonomía económica y las instituciones democráticas del país.

---

### Los fundamentos de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador: el reconocimiento diplomático, El no reconocimiento y la política del buen vecino (1926-1945)

Estados Unidos reconoció a El Salvador como estado independiente en 1849, pero la relación entre las dos naciones tomó una forma más trascendental a principios del siglo XX a medida que los intereses económicos estadounidenses se expandieron por toda Centroamérica y la Doctrina Monroe evolucionó hacia una gestión regional activa.<sup>[13]</sup>

El periodo comprendido entre 1926 y mediados de la década de 1940 sentó precedentes sobre cómo Estados Unidos utilizaría el reconocimiento diplomático y la retirada como herramientas de influencia política que perdurarían a lo largo del siglo.

Cuando un golpe militar llevó al poder al general Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931, Estados Unidos invocó el Tratado de Paz y Amistad de 1923 para negarse al reconocimiento diplomático, adhiriéndose a una política formal de no reconocer a los gobiernos que llegaban al poder por la fuerza militar.<sup>[13][16][55]</sup> Este no reconocimiento duró hasta el 26 de enero de 1934, cuando el secretario de Estado Cordell Hull cambió repentinamente de rumbo y otorgó el reconocimiento al gobierno de Martínez.<sup>[13]</sup> El catalizador inmediato de este cambio sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, pero el momento es revelador: Martínez acababa de reprimir brutalmente un levantamiento rural en enero de 1932 conocido como La Matanza, en el que murieron entre 10 000 y 40 000 salvadoreños, siendo 30 000 la cifra más citada.<sup>[55]</sup> Algunos historiadores sostienen que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Martínez después de su violenta respuesta a lo que el Departamento de Estado caracterizó como una rebelión de influencia comunista demostró que Estados Unidos estaba dispuesto a abandonar los principios declarados de apoyo.

la democracia cuando se enfrenta al espectro de la agitación izquierdista.[10][16][55]

El contexto de la política estadounidense durante este período refleja la Política del Buen Vecino más amplia anunciada por el presidente Franklin D. Roosevelt en su discurso inaugural de 1933.[37][40] El compromiso declarado de Roosevelt con la no intervención y el respeto mutuo por la soberanía latinoamericana marcó un cambio con respecto a los patrones anteriores de intervención militar directa.[37] La política incluyó la retirada de tropas de Haití y Nicaragua, la negociación de acuerdos comerciales recíprocos y la creación del Banco de Exportación e Importación para proporcionar créditos para el desarrollo.[37] Sin embargo, los académicos han documentado que el principio de no intervención de la Política del Buen Vecino cedió sistemáticamente cuando se percibió que los intereses estratégicos estadounidenses estaban amenazados.[37][40] En el caso de El Salvador, el rápido cambio del no reconocimiento al reconocimiento de Martínez demostró que el anticomunismo y la preservación del orden (tal como lo definieron los responsables políticos estadounidenses) prevalecerían sobre la adhesión formal a los principios democráticos. El reconocimiento de Martínez sentó un precedente que se repetiría a lo largo del siglo: Estados Unidos apoyaría regímenes autoritarios que mantuvieran la estabilidad y protegieran los intereses económicos estadounidenses, independientemente de sus prácticas de derechos humanos o métodos antidemocráticos. gobernancia.

Durante las décadas de 1930 y 1940, El Salvador se integró cada vez más a la órbita económica de Estados Unidos a través de relaciones comerciales y flujos de capital que establecerían patrones de dependencia que durarían décadas.[38][41] El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ambos fuertemente influenciados por Estados Unidos, comenzaron a moldear la política económica centroamericana hacia la liberalización y el desarrollo orientado a la exportación.[41] Estas instituciones promovieron la eliminación de barreras comerciales y la integración económica regional, políticas que beneficiaron más a los exportadores e inversionistas estadounidenses que a la población rural salvadoreña o a las industrias nacionales.[41] Al final de la Segunda Guerra Mundial, la economía de El Salvador se estaba estructurando en torno a la producción de productos agrícolas, particularmente café y azúcar, para la exportación a Estados Unidos, mientras que el país importaba productos manufacturados de empresas estadounidenses.[2][41] Este patrón de asimetría comercial se profundizaría a lo largo del período de posguerra.

---

## Contención de la Guerra Fría y modernización militar (1950-1979): La construcción del Estado Capacidad para el anticomunismo

El marco de la Guerra Fría que surgió después de 1945 transformó la política estadounidense hacia El Salvador, pasando de la influencia diplomática a la asistencia militar directa y los programas de entrenamiento diseñados para fortalecer la capacidad del Estado salvadoreño para resistir los movimientos de izquierda.[4] A partir de 1950, El Salvador recibió sus primeros paquetes formales de asistencia de seguridad en el marco del Programa de Asistencia Militar (PAM).[9] Entre 1950 y 1969, la asistencia de seguridad patrocinada oficialmente por Estados Unidos a El Salvador promedió aproximadamente 400 000 dólares anuales, una suma modesta que reflejaba la prioridad relativamente baja que El Salvador tenía en la estrategia inicial de la Guerra Fría.[9] Sin embargo, esta cifra aumentó sustancialmente en la década de 1970: entre 1970 y 1975, la ayuda militar anual ascendió a aproximadamente 1,4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 250 por ciento.[9] En 1976, la ayuda militar estadounidense volvió a aumentar un 57 por ciento.[9] Estas transferencias financieras estuvieron acompañadas de un programa integral de entrenamiento militar y desarrollo institucional. Estados Unidos entrenó a 1925 oficiales salvadoreños durante el período 1950-1976, muchos de ellos a través de la Escuela de las Américas ubicada en Panamá.[9] Estos programas de entrenamiento incorporaron la doctrina militar estadounidense, las técnicas de contrainsurgencia y los enfoques organizativos directamente en la estructura de las fuerzas armadas salvadoreñas.

Este período también fue testigo de una intensificación del compromiso económico de Estados Unidos con Centroamérica a través de instituciones multilaterales de desarrollo. La Alianza para el Progreso, lanzada por el presidente Kennedy en 1961, canalizó

La asistencia económica estadounidense a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, a menudo con condiciones explícitas que exigen a los países receptores la adopción de reformas económicas neoliberales, incluyendo la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la eliminación de barreras a la inversión extranjera.[41] Para El Salvador, estas condiciones significaron que la economía del país se orientó cada vez más hacia la producción de exportación y las políticas impulsadas por el mercado, lo que limitó la capacidad del gobierno para llevar a cabo una reforma agraria redistributiva o políticas de gasto social que podrían abordar la pobreza rural subyacente y la desigualdad.

El panorama político de El Salvador durante este período se caracterizó por una crisis cada vez más profunda, arraigada en la desigualdad y la exclusión. Una oligarquía terrateniente mantenía un control estricto sobre las tierras agrícolas más productivas del país, y una sucesión de gobiernos militares utilizó la fuerza para reprimir la organización campesina, los sindicatos y los movimientos políticos de izquierda emergentes.[50][51] Las elecciones fraudulentas de 1977 que llevaron al poder al general Carlos Romero marcaron una escalada en la represión gubernamental contra los disidentes civiles, y las tensiones aumentaron a lo largo de finales de la década de 1970 a medida que el gobierno reprimía las manifestaciones y el movimiento obrero organizado.[14][17] Estados Unidos observó estos acontecimientos con alarma, viendo a El Salvador a través del prisma de la bipolaridad de la Guerra Fría: cualquier movimiento de izquierda, independientemente de sus orígenes en agravios sociales legítimos, era automáticamente caracterizado como influenciado por el comunismo o respaldado por la Unión Soviética.[14] Este enfoque se volvería trascendental a medida que se acercaba la guerra civil.

---

## La Guerra Civil y el punto álgido de la intervención militar estadounidense (1980-1992): entrenamiento, armamento y la catástrofe de los derechos humanos.

El asesinato del arzobispo Óscar Romero el 24 de marzo de 1980 marcó un punto de inflexión hacia el conflicto abierto.[4][14][17][19] Romero se había convertido en un crítico cada vez más vehemente de los abusos contra los derechos humanos del ejército salvadoreño y había instado públicamente al presidente Jimmy Carter a suspender la ayuda militar al régimen.[4][14][17]

Su asesinato a manos de miembros de escuadrones de la muerte, probablemente con conocimientos y participación militar, galvanizó a la izquierda e impulsó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de grupos guerrilleros, a una insurgencia armada abierta.[14][17][19] Estados Unidos, tras haber suspendido brevemente la ayuda militar en respuesta a los asesinatos de cuatro trabajadores religiosos estadounidenses en diciembre de 1980, reanudó rápidamente su apoyo.[4] Para cuando Ronald Reagan asumió la presidencia en enero de 1981, la administración Carter ya había aumentado la ayuda militar a 10 millones de dólares, incluyendo fondos para armas, municiones, granadas y helicópteros.[4][14]

La administración Reagan intensificó drásticamente la intervención militar estadounidense en El Salvador. Para 1984, la ayuda militar había alcanzado los 196,6 millones de dólares, una cifra máxima que reflejaba la urgencia que la administración Reagan le otorgaba a la prevención de lo que temía que se convirtiera en otro estado satélite soviético en Centroamérica.[7][25] Entre 1980 y 1990, Estados Unidos proporcionó más de mil millones de dólares en asistencia militar a El Salvador, de los cuales aproximadamente 996 millones se destinaron a educación y entrenamiento militar.[10][19][26] La magnitud de esta asistencia en relación con el pequeño tamaño de El Salvador significó que las fuerzas armadas salvadoreñas se volvieran casi totalmente dependientes del armamento, la logística, el entrenamiento y la orientación estratégica estadounidenses. En mayo de 1983, documentos desclasificados del gobierno estadounidense revelaron que oficiales militares estadounidenses trabajaban dentro del Alto Mando salvadoreño y tomaban importantes decisiones estratégicas y tácticas.[4][17] Estados Unidos desplegó 36 asesores militares en El Salvador en marzo de 1980 para entrenar a soldados salvadoreños en técnicas de contrainsurgencia en tres centros de entrenamiento que también servían como bases de helicópteros.[9] Ocho buques de la Armada, incluido un portaaviones, con más de 2.000 infantes de marina, fueron desplegados para patrullar la costa del Pacífico de El Salvador.[9]

Una de las iniciativas militares estadounidenses más trascendentales en El Salvador fue la creación y el entrenamiento de unidades especializadas de contrainsurgencia. El Batallón Atlácatl, establecido en 1981 con fondos del gobierno estadounidense, fue uno de los primeros en participar en este proceso.

y entrenamiento, representaba un batallón de infantería de despliegue rápido diseñado específicamente para la guerra de contrainsurgencia.[4][46] El Atlácatl fue entrenado por asesores militares de los Estados Unidos y descrito como "el orgullo del equipo militar de los Estados Unidos en San Salvador".[4] La misión del batallón era eliminar la presencia rebelde en el norte de la provincia de Morazán, donde el FMLN había establecido campamentos y centros de entrenamiento. Las acciones del Batallón Atlácatl durante la guerra civil se harían tristemente célebres por abusos sistemáticos de los derechos humanos, en particular la masacre de El Mozote del 11 de diciembre de 1981.[10][19][43][46]

La masacre de El Mozote representa quizás la ilustración más cruda de cómo el entrenamiento y el apoyo militar estadounidense se tradujeron en violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra la población civil. Entre el 10 y el 11 de diciembre de 1981, miembros del Batallón Atlácatl, bajo las órdenes de Domingo Monterrosa, asesinaron sistemáticamente a más de 200 civiles en la aldea de El Mozote, aunque algunas estimaciones sitúan el total en más de 800.[43][46] Los habitantes de la aldea fueron detenidos, interrogados, torturados y ejecutados. Los hombres fueron asesinados en diversos lugares.

Las mujeres y las niñas mayores eran separadas de sus hijos, violadas y luego asesinadas con ametralladoras.

Los niños fueron asesinados degollados y ahorcados, algunas víctimas de tan solo dos años.[46] Casi la mitad de los asesinados eran menores de diez años.[10][19][43] Según algunos relatos, niñas de tan solo diez años fueron violadas, y se dice que los soldados se jactaban de preferir a las niñas de doce años.[46] Después de la masacre, los soldados prendieron fuego a los edificios. La operación no tenía un objetivo militar: la aldea estaba habitada únicamente por civiles, en su mayoría familias que habían huido de las zonas circundantes en busca de refugio.

La respuesta del gobierno de Reagan a la masacre de El Mozote reveló la prioridad que otorgaba a la victoria en la Guerra Fría por encima de la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Cuando el periodista Raymond Bonner publicó reportajes sobre la masacre en el New York Times, la Casa Blanca de Reagan orquestó una sofisticada campaña de relaciones públicas para desacreditar el reportaje, difundiendo desinformación que afirmaba que la masacre no había ocurrido o que el FMLN la había escenificado para generar prensa negativa sobre el ejército salvadoreño.[46] Posteriormente, el New York Times destituyó a Bonner de su cargo en El Salvador a pesar de la posterior verificación de su reportaje. Documentos desclasificados décadas después muestran que las agencias de inteligencia estadounidenses tenían información sobre la masacre en ese momento, pero optaron por no revelarla.[44] [46] En una revelación particularmente impactante, el profesor de Stanford, Terry Karl, testificó en 2021 que un asesor militar estadounidense, Allen Bruce Hazelwood, probablemente estuvo presente durante la masacre, según evidencia documental y entrevistas.[46] El gobierno de Estados Unidos participó en lo que Karl denominó una "sofisticada operación de encubrimiento" para ocultar la presencia estadounidense en la masacre y proteger a los militares salvadoreños de rendir cuentas.[46]

Más allá de El Mozote, los documentos desclasificados del gobierno estadounidense obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional revelan que las agencias de inteligencia estadounidenses mantuvieron un conocimiento detallado de las actividades de los escuadrones de la muerte, las ejecuciones extrajudiciales y los abusos sistemáticos contra los derechos humanos perpetrados por el ejército salvadoreño y las fuerzas paramilitares aliadas durante la década de 1980.[1][47] En un documento particularmente revelador de 1984, que inicialmente fue censurado en gran medida al ser publicado bajo la Ley de Libertad de Información, pero que posteriormente fue desclasificado en su totalidad en 1993, la CIA analizó "Cómo lidiar con los escuadrones de la muerte".[47] La versión publicada inicialmente daba la impresión de que el gobierno de Duarte y las fuerzas armadas salvadoreñas estaban tomando medidas efectivas para poner fin a las actividades de los escuadrones de la muerte. La versión completa obtenida posteriormente afirmaba claramente que los esfuerzos del gobierno y el ejército "han logrado pocos avances y se han dirigido casi exclusivamente a apaciguar a Washington".[47]

La Comisión de la Verdad, establecida tras el fin de la guerra civil, que investigó los abusos contra los derechos humanos entre 1980 y 1991, determinó que el 85 por ciento de los casos denunciados involucraban a agentes estatales o escuadrones de la muerte aliados con las fuerzas armadas salvadoreñas.[10][19][26] La Comisión recomendó la destitución inmediata de más de 40 oficiales militares por su participación en violaciones de derechos humanos, entre ellos el Ministro de Defensa René Emilio Ponce, el Viceministro Orlando Zepeda y el excomandante de la Fuerza Aérea Juan Rafael Bustillo.[45] Sin embargo, el gobierno salvadoreño concedió amnistía a los perpetradores poco después de la paz.

Se firmaron acuerdos que impidieron el enjuiciamiento y la rendición de cuentas.[39][45] Estados Unidos, a pesar de su declarado compromiso con los derechos humanos en política exterior, no presionó a El Salvador para que responsabilizara a los oficiales militares por las atrocidades que habían sido facilitadas por el entrenamiento, las armas y el apoyo estratégico estadounidenses.

Las consecuencias humanas de la guerra civil de doce años fueron devastadoras. El conflicto provocó aproximadamente 75 000 muertes y el desplazamiento de más de un millón de salvadoreños, aproximadamente una quinta parte de la población del país en aquel entonces.[10][21] Medio millón de salvadoreños huyeron a países vecinos o a Estados Unidos durante la década de 1980.[10][21][26] A pesar de haber huido de la violencia directamente relacionada con las operaciones militares apoyadas por Estados Unidos, solo el 2 % de las solicitudes de asilo presentadas por salvadoreños durante la guerra fueron aprobadas.[10][21][26] Esta tasa de aprobación tan baja se debía directamente a la política exterior estadounidense: extender la protección de refugiados a los salvadoreños habría contradicho la propia política de la administración Reagan de apoyar al gobierno salvadoreño, admitiendo de hecho que el gobierno al que Estados Unidos apoyaba era responsable de la persecución de la que huían los salvadoreños.[10][21][26]

---

## Transición democrática, reestructuración económica e integración del CAFTA-DR (1992-2020): De la guerra al desarrollo impulsado por el mercado

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, pusieron fin a la guerra civil salvadoreña mediante negociaciones mediadas por las Naciones Unidas.[28][49][52] Los acuerdos incluían disposiciones para la reforma militar, el establecimiento de una fuerza policial civil, la reforma judicial, cambios en el sistema electoral y un programa de transferencia de tierras destinado a reintegrar a los excombatientes a la vida civil.[28][49][52] Estas disposiciones representaron cambios institucionales significativos que reflejaban un compromiso genuino con la desmilitarización y la democratización, al menos en términos estructurales formales. Sin embargo, el período de posguerra también fue testigo de la consolidación de un modelo particular de política económica que Estados Unidos promovió activamente: la liberalización del mercado neoliberal a través de acuerdos comerciales, la privatización de empresas estatales y programas de ajuste estructural coordinados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.[28][38][41]

El período posterior al conflicto creó lo que el Banco Mundial denominó una "ventana de oportunidad" para implementar reformas económicas integrales.[28][38] La administración Cristiani, elegida en 1989, solicitó asistencia al Banco Mundial con un programa de ajuste estructural, y el Banco aprobó rápidamente préstamos de ajuste estructural (SAL).[28][38] El SAL I proporcionó \$75 millones en 1991, seguido por el SAL II en 1993 con \$50 millones adicionales, para apoyar el programa de reforma económica del gobierno.[28] Estos préstamos venían con condiciones explícitas que requerían reforma tributaria, privatización, liberalización del comercio, reforma del sector financiero y cambios en el sector social.[28][38] El gobierno implementó una liberalización comercial integral, eliminación de restricciones a las transacciones de cuenta corriente y de capital, privatización de bancos estatales y abolición de los poderes monopólicos de las paraestatales agrícolas.[28][38][41] A mediados de la década de 1990, El Salvador se había convertido en una de las economías más liberalizadas comercialmente de Centroamérica.

El programa de transferencia de tierras establecido en virtud de los acuerdos de paz representó uno de los compromisos más importantes posteriores al conflicto, pero finalmente se vio comprometido por la resistencia política de las élites terratenientes y la insuficiencia de recursos. La Fase I de la reforma agraria se centró en la expropiación de propiedades que superaban las 500 hectáreas y afectó a aproximadamente 469 propiedades individuales que sumaban 215 167 hectáreas, casi el 15 % de todas las tierras agrícolas salvadoreñas.[15][18] Entre 36 697 y 38 000 familias recibieron tierras a través de la Fase I.[15][18][25] La Fase II, que habría extendido la expropiación a propiedades de 100 a 500 hectáreas y habría afectado significativamente a las plantaciones de café, algodón y azúcar, nunca se implementó.[15][18] Cuando se adoptó la nueva constitución de 1983, se estableció un límite máximo para las propiedades de tierras en 245 hectáreas en lugar de la original.

Propuesta de 100 hectáreas, protegiendo así la gran mayoría de las grandes plantaciones que superaban las 245 hectáreas.[15][18] La Fase III, el programa "Tierra para el Agricultor", se implementó con mayor éxito, transfiriendo finalmente más de 103.000 hectáreas a aproximadamente 50.000 beneficiarios a finales de la década de 1990.[15][18] Sin embargo, gran parte de esta tierra transferida era marginal: más del 60 por ciento se clasificaba como pastizal, barbecho o inaccesible debido a bosques o terreno montañoso.[15][18]

La decisión de política económica más transformadora del período de posguerra fue la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial de El Salvador el 1 de enero de 2001.[3][27][30] Esta decisión de "dolarización" fue implementada por la administración de Flores con el apoyo de organizaciones empresariales y el gobierno de Estados Unidos.[3][27] La justificación declarada fue que la dolarización reduciría el riesgo cambiario, disminuiría las tasas de interés para los préstamos, atraería inversión extranjera directa e impulsaría el crecimiento económico al fortalecer los vínculos con la economía estadounidense.[3][27][30] Los efectos reales de la dolarización han sido cuestionados por los académicos. Investigaciones que utilizan marcos de paridad de intereses y reglas de Taylor sugieren que la dolarización sí redujo las tasas de interés de los bancos comerciales en aproximadamente 4 a 5 puntos porcentuales al disminuir el riesgo percibido de devaluación de la moneda, generando ahorros netos anuales promedio del 0,5 por ciento del PIB para el sector privado y del 0,25 por ciento del PIB para el sector público.[3][30] Sin embargo, la dolarización eliminó por completo la capacidad de política monetaria independiente de El Salvador.[3][27][30] El Banco Central ya no podía ajustar la política monetaria en respuesta a las condiciones económicas salvadoreñas; en cambio, la política monetaria del país estaba determinada por las decisiones tomadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos con base en las condiciones económicas estadounidenses.[3][30] Las investigaciones han mostrado una fuerte asociación positiva entre la producción salvadoreña y las decisiones de política de la Reserva Federal de los Estados Unidos después de la dolarización, lo que implica que el ciclo económico del país se sincronizó más con el ciclo económico estadounidense.[3][30]

La economía política de la dolarización revela cómo opera la influencia institucional de Estados Unidos incluso sin coerción explícita. Estados Unidos y organizaciones internacionales, incluido el FMI, promovieron la dolarización indirectamente mediante préstamos condicionados que hicieron que los tipos de cambio flotantes fueran económicamente insostenibles para los países en desarrollo que habían acumulado deuda denominada en dólares.[27] Para El Salvador, la acumulación de deuda externa denominada en dólares durante el período de la guerra civil y la reconstrucción posterior al terremoto hizo que la dolarización pareciera económicamente racional, aunque representara una pérdida de soberanía monetaria.[27][30]

La decisión fue ratificada por la Asamblea Nacional en el año 2000 con el apoyo del gobierno de ARENA, y El Salvador se convirtió en el primer país centroamericano en adoptar oficialmente el dólar estadounidense.

El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA), firmado en 2004, representó otro importante instrumento de influencia económica estadounidense en El Salvador.[2][25][34][38] El Salvador se convirtió en el primer país centroamericano en ratificar el acuerdo el 17 de diciembre de 2004.[25] Bajo el DR-CAFTA, Estados Unidos eliminó los aranceles sobre muchas exportaciones centroamericanas, mientras que los países centroamericanos redujeron las barreras a los bienes y servicios estadounidenses.[2][25] El acuerdo ha tenido efectos altamente asimétricos. Entre 2005 y 2014, las exportaciones nacionales estadounidenses a El Salvador como porcentaje de las importaciones para consumo aumentaron del 113% al 126,3%, lo que indica que Estados Unidos exportaba significativamente más a El Salvador de lo que importaba.[2] Las exportaciones estadounidenses de cultivos a El Salvador aumentaron en 124 millones de dólares entre 2005 y 2014, de 139 millones a 263 millones de dólares.[2] Mientras tanto, las exportaciones de cultivos de El Salvador a los EE. UU. aumentaron en solo 4 millones de dólares durante el mismo período.[2] La balanza comercial de EE. UU. con El Salvador mejoró de -204 millones de dólares en 2005 a +630 millones de dólares en 2014, un cambio de 834 millones de dólares en el superávit comercial de EE. UU.[2] Los mayores aumentos en las exportaciones netas de EE. UU. provinieron de productos manufacturados de petróleo y carbón (746 millones de dólares) y productos farmacéuticos y químicos (208 millones de dólares).[2] Mientras tanto, las importaciones de prendas de vestir y accesorios manufacturados de El Salvador aumentaron de 1.400 millones de dólares a 1.800 millones de dólares, lo que refleja la continua dependencia de la economía de El Salvador de la manufactura de bajo valor para la exportación.

Las consecuencias de la liberalización del comercio para la agricultura salvadoreña han sido significativas. Competencia

Las exportaciones agrícolas estadounidenses a gran escala, que se benefician de importantes subsidios gubernamentales, han perjudicado a los pequeños agricultores salvadoreños que cultivan productos tradicionales.[21][41] El sector cafetalero, históricamente la principal exportación agrícola del país, se enfrentó a una intensa competencia de productores brasileños y vietnamitas y perdió importancia económica. La pobreza rural aumentó, el empleo agrícola disminuyó y muchos salvadoreños rurales no tuvieron más remedio que emigrar a zonas urbanas o a Estados Unidos. A principios de la década de 2000, las remesas de los salvadoreños que trabajaban en el extranjero se convirtieron en la principal fuente de ingresos extranjeros del país, superando incluso los ingresos por exportaciones.[27][29] Las remesas de los migrantes en Estados Unidos, muchos de los cuales habían huido de la guerra civil o buscado mejores oportunidades económicas tras su fin, se volvieron cruciales para la supervivencia de los hogares de aproximadamente una quinta parte de la población salvadoreña.[27][29]

---

Violencia de pandillas, política de deportación y el efecto recíproco del sistema de justicia penal estadounidense.  
Política (1996-2020): Consecuencias imprevistas y violencia cíclica

Uno de los impactos más importantes, aunque a menudo pasados por alto, de la política estadounidense sobre El Salvador ha resultado de las políticas de inmigración y deportación del país tras la aprobación en 1996 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA). Esta legislación amplió significativamente las categorías de no ciudadanos sujetos a deportación y simplificó los procedimientos de deportación, incluso para personas condenadas por delitos.[21][32][35] La legislación creó un círculo vicioso que desestabilizaría a El Salvador durante décadas. A partir de 1996, Estados Unidos comenzó a deportar sistemáticamente a pandilleros y personas con antecedentes penales a El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países centroamericanos.[32] Entre 1996 y principios de la década de 2000, miles de deportados de Estados Unidos, incluidos miembros de pandillas fundadas en Los Ángeles como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla de la Calle 18 (Barrio 18), llegaron a El Salvador donde no tenían vínculos familiares y tenían oportunidades económicas legítimas limitadas.

Mara Salvatrucha (MS-13) fue fundada originalmente a principios de la década de 1980 por inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles que se unieron para protección mutua en vecindarios dominados por pandillas.[19][51] La pandilla de la Calle 18 (Barrio 18) se formó alrededor de la Calle 18 en el vecindario de Pico-Union de Los Ángeles y absorbió a refugiados salvadoreños y otros centroamericanos de la guerra civil.[19][51][54] Las guerras de pandillas se intensificaron en Los Ángeles durante las décadas de 1980 y 1990, lo que resultó en homicidios y violencia relacionada con pandillas que provocaron un aumento de la actividad policial y condenas penales. La legislación IIRIRA de 1996 aumentó drásticamente las deportaciones de pandilleros con antecedentes penales.

Las investigaciones sobre las consecuencias de las deportaciones de pandillas estadounidenses a El Salvador demuestran un claro vínculo causal entre la política de deportación y la violencia de pandillas subsiguiente en el país. Entre 1996 y 1997, la tasa de encarcelamiento de pandilleros afiliados a Estados Unidos en El Salvador aumentó drásticamente en los municipios que recibieron deportados en comparación con los que no los recibieron.[32] La actividad de pandillas en El Salvador estuvo positivamente asociada con la política de deportación estadounidense. Las actividades de extorsión y narcotráfico se duplicaron y la violencia aumentó un 40 por ciento entre 1985 y 2011.[32] La tasa de encarcelamiento de personas con afiliación a pandillas estadounidenses aumentó en una magnitud similar durante el mismo período.[32] Los pandilleros deportados trajeron consigo no solo habilidades violentas y técnicas criminales, sino también estructuras organizativas y redes sociales que facilitaron la rápida expansión de las pandillas en El Salvador.[32] Para la década de 2010, El Salvador se había convertido en el país más peligroso del mundo, con tasas de homicidio que superaban los 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muchos de ellos vinculados a la MS-13 o a la pandilla Calle 18.[10][19]

La investigación documenta además que el ciclo de deportación de pandillas, aumento de la violencia y migración subsiguiente

crea un ciclo de retroalimentación que se retroalimenta.[32] A medida que aumenta la violencia de pandillas en El Salvador, los homicidios aumentan y las poblaciones afectadas por la violencia, en particular los jóvenes, tienen más probabilidades de migrar a los Estados Unidos en busca de seguridad y oportunidades económicas.[32] Estos menores no acompañados y jóvenes migrantes corren el riesgo de ser arrestados por violaciones de inmigración, cargos penales o participación en pandillas en los Estados Unidos, lo que lleva a la deportación de regreso a El Salvador, donde enfrentan el reclutamiento de pandillas, la violencia o los asesinatos selectivos de deportados por parte de las fuerzas de seguridad o pandillas rivales.[32][35] Este ciclo continúa, y cada deportación desestabiliza aún más a las comunidades salvadoreñas y aumenta la migración hacia el exterior.

El destino específico de las personas deportadas ha tenido consecuencias catastróficas documentadas. Human Rights Watch documentó numerosos casos de salvadoreños deportados de Estados Unidos que fueron asesinados por pandillas o fuerzas de seguridad después de la deportación.[35] En un caso, un ex pandillero deportado a El Salvador fue asesinado cuatro meses después por la pandilla de la que había huido cuando emigró originalmente a Estados Unidos.[35] En otro caso, primos que habían huido del reclutamiento de pandillas emigrando a Estados Unidos fueron arrestados sin orden judicial por la policía salvadoreña después de la deportación y posteriormente se descubrió que habían sido asesinados por la policía o escuadrones de la muerte.[35] La policía y las fuerzas de seguridad a menudo presumen que las personas deportadas de Estados Unidos son pandilleros y delincuentes activos, y atacan a los deportados basándose en información compartida por Estados Unidos a través de INTERPOL.[35] La documentación indica que los funcionarios salvadoreños utilizan la amenaza que representan los pandilleros deportados como justificación para ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, incluso contra personas que en realidad no son pandilleros.[35]

La ironía y la tragedia de esta dinámica radican en que la política estadounidense creó las condiciones que generaron la violencia de pandillas y la criminalidad relacionada con ellas, lo que a su vez justificó las duras políticas de deportación de Estados Unidos, que exportaron esa violencia y criminalidad a los países de donde huían los migrantes. En esencia, Estados Unidos facilitó la creación de redes de pandillas transnacionales, concentró capital criminal y experiencia organizativa en países que ya sufrían violencia de pandillas, y luego culpó a los países centroamericanos por su incapacidad para controlar la violencia resultante. La responsabilidad estructural de las decisiones políticas estadounidenses sobre la violencia de pandillas en El Salvador —decisiones arraigadas en la política interna de justicia penal más que en la política exterior propiamente dicha— ha sido en gran medida ignorada en el discurso político estadounidense.

---

## **La administración Bukele, la participación contemporánea de Estados Unidos y la democracia Retroceso (2021-2026): Cooperación en materia de seguridad y consolidación del autoritarismo**

La elección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador en febrero de 2019 inicialmente pareció ofrecer esperanza para abordar la violencia de pandillas y la corrupción que habían devastado el país durante las dos décadas anteriores.[10][19] [31][57] Bukele se postuló con una plataforma de lucha contra el crimen y la corrupción sin las limitaciones de las divisiones políticas tradicionales de izquierda y derecha en El Salvador.[10][31][57] Al asumir el cargo, implementó políticas cada vez más agresivas dirigidas a la violencia de pandillas, incluyendo arrestos masivos, confinamientos de detención que impedían la entrada de visitantes a las prisiones y la expansión de la presencia policial y militar en áreas dominadas por pandillas.[10][19][31] Para 2022, la tasa de homicidios de El Salvador había disminuido drásticamente a 7.8 por cada 100,000 residentes, frente a 103 por cada 100,000 en 2015.[10][19][31] La reducción de la violencia hizo que Bukele fuera enormemente popular entre la población salvadoreña, y fue reelegido en febrero de 2024 con una victoria aplastante.[31][57]

Sin embargo, la administración de Bukele ha implementado simultáneamente políticas que Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Freedom House y numerosos observadores internacionales han caracterizado como retroceso democrático, abusos de los derechos humanos y consolidación autoritaria.[23][31][35][57][60] En 2021,

Bukele destituyó a la Corte Suprema y ordenó a los militares que tomaran la Asamblea Nacional, impidiendo temporalmente el acceso de los políticos de la oposición al poder legislativo, una acción ampliamente denunciada como un golpe de Estado inconstitucional que, sin embargo, generó escasas críticas internacionales.[31][57] Bukele justificó estas acciones como necesarias para combatir la corrupción. Amplió los poderes de los decretos de emergencia, purgó el poder judicial de jueces considerados insuficientemente leales, llenó los tribunales con jueces designados, destituyó a jueces civiles y otros funcionarios burocráticos acusados de corrupción, y persiguió a candidatos de la oposición política con procesos penales.[31][57][60] Organizaciones de derechos humanos han documentado que el gobierno utiliza acusaciones de corrupción como pretexto para procesar a opositores políticos, una técnica denominada "autoritarismo encubierto" por estudiosos de la gobernanza autoritaria.[57] Para 2024, Bukele había enmendado la constitución para permitir su reelección indefinidamente a pesar de los límites constitucionales de mandato, eliminando de hecho el control sobre el poder ejecutivo que representaban dichos límites.[57]

La respuesta del gobierno de Estados Unidos a la consolidación autoritaria de Bukele ha sido notablemente ambivalente. Durante la administración Trump (2017-2021), las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador mejoraron considerablemente, ya que la administración Trump priorizó la cooperación en materia de control migratorio y la alineación en seguridad por encima de las preocupaciones sobre la gobernanza democrática.[8][31] El embajador Ronald Johnson, enviado de Trump a El Salvador, desarrolló una estrecha relación personal con Bukele y desempeñó un papel clave en elevar el perfil de Bukele entre los republicanos, posicionándolo como un líder exitoso que abordaba el crimen a través de una gobernanza firme.[31] Según informes, Johnson también protegió a Bukele del escrutinio sobre supuestos acuerdos con pandillas y preocupaciones de corrupción.[31]

La administración Biden intentó inicialmente un enfoque diferente, con la llegada de la embajadora Jean Manes en 2021 con el mandato de abordar las acciones autoritarias y las violaciones de derechos humanos de Bukele.[31] Sin embargo, Manes enfrentó resistencia dentro de la embajada estadounidense, donde el sucesor de Johnson como jefe de la estación de la CIA supuestamente seguía estrechamente alineado con Bukele y la continua influencia del exembajador Johnson en El Salvador.[31] Según un informe de ProPublica basado en documentos desclasificados del inspector general, Bukele solicitó específicamente que Johnson destituyera a un contratista de la embajada que estaba ayudando a los investigadores estadounidenses a examinar la corrupción de la administración Bukele.[31] El sucesor de Johnson, otro embajador, concluyó que "Bukele solicitó a Johnson que destituyera [al contratista] y eso fue lo que sucedió" [31] Cuando Manes intentó forzar la salida del jefe de la estación de la CIA que creía "demasiado cercano" a Bukele, enfrentó resistencia interna de funcionarios de carrera del Departamento de Estado y de inteligencia que mantenían la estrecha relación previa con el presidente salvadoreño.[31]

Estados Unidos y El Salvador concluyeron un acuerdo que permitía a la administración Trump deportar a solicitantes de asilo de otros países (incluidos Venezuela, Mauricio y otras naciones) a El Salvador para que esperaran el resultado de sus casos de asilo mientras estaban detenidos en instalaciones salvadoreñas.[8][10][31] Este acuerdo, alcanzado en 2025, incluía un pago de 15 millones de dólares estadounidenses a El Salvador para encarcelar a los deportados en la megaprisión CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). [10][31][57] Unos 278 hombres deportados por la administración Trump a El Salvador bajo este acuerdo han sido acusados de pertenecer a pandillas, a menudo basándose en conexiones infundadas, como simplemente tener tatuajes.[10][31] Múltiples fuentes documentan que, mientras están encarcelados en CECOT, algunos deportados sufren torturas y condiciones inhumanas; al menos un venezolano deportado a CECOT ha denunciado haber sido torturado por los guardias.[31] Este acuerdo, en la práctica, delega la aplicación de la ley de inmigración estadounidense a un régimen cada vez más autoritario, que utiliza instalaciones penitenciarias salvadoreñas y que podría facilitar violaciones de los derechos humanos de los deportados.

En enero de 2026, el Servicio de Investigación del Congreso publicó un informe actualizado sobre El Salvador en el que se señalaban las crecientes preocupaciones sobre la erosión democrática, las detenciones arbitrarias y las violaciones del debido proceso bajo el mandato de Bukele.[34] Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones documentadas, la administración Trump ha buscado profundizar la cooperación en materia de seguridad con El Salvador, incluidos acuerdos de deportación ampliados y la aplicación de la ley en materia de migración.

coordinación. El Salvador, bajo el liderazgo de Bukele, también ha desplegado a más de 1.000 agentes en la frontera con Guatemala para prevenir el contrabando de migrantes con destino a Estados Unidos, subcontratando de hecho la vigilancia fronteriza estadounidense a El Salvador, mientras que la administración Trump amenaza simultáneamente con sanciones contra otros países que no cooperen con la deportación y la aplicación de la ley migratoria.[8][31][34]

El acuerdo marco de comercio recíproco 2025-2026 entre Estados Unidos y El Salvador, si bien se presenta como una modernización de las obligaciones existentes del CAFTA-DR, institucionaliza aún más la integración económica de El Salvador con Estados Unidos y restringe la autonomía política.[5] El acuerdo enfatiza la eliminación de aranceles recíprocos para ciertos productos, incluidos textiles y prendas de vestir, aborda las empresas estatales y las barreras no arancelarias, e incluye compromisos en materia de propiedad intelectual, tributación de servicios digitales, normas laborales y protección ambiental.[5] Sin embargo, el acuerdo mantiene la asimetría fundamental del CAFTA-DR al tiempo que extiende un mayor control estadounidense sobre la política económica salvadoreña.

---

## Evaluación integral del impacto: cómo un siglo de política estadounidense ha transformado El Salvador

### Consecuencias económicas: dependencia, desigualdad y vulnerabilidad estructural

A lo largo de cien años, las políticas económicas de Estados Unidos han reestructurado fundamentalmente la economía de El Salvador, pasando de un sistema agrario diversificado a un modelo orientado a la exportación, dependiente de productos básicos específicos, inversión extranjera directa y remesas de migrantes internacionales. Los acuerdos comerciales y las políticas arancelarias promovidas por Estados Unidos, desde los acuerdos comerciales recíprocos de la Política del Buen Vecino hasta el CAFTA-DR, han orientado sistemáticamente a El Salvador hacia la producción para la exportación al mercado estadounidense, al tiempo que han expuesto al país a la competencia de productos agrícolas estadounidenses fuertemente subsidiados.[2][21][37][38][41] El resultado ha sido el colapso de la agricultura tradicional para el consumo interno, la pobreza rural, el desempleo agrícola y la migración forzada.

La decisión de dolarización de 2001, promovida activamente por el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, eliminó la autonomía de la política monetaria de El Salvador y vinculó el desempeño macroeconómico del país directamente a las decisiones de la Reserva Federal.[3][27][30] Esta pérdida de soberanía en materia de política monetaria limita la capacidad del gobierno salvadoreño para responder a recesiones económicas o crisis cambiarias. Cuando se producen perturbaciones externas, como la crisis financiera de 2008, desastres naturales o interrupciones relacionadas con pandemias, El Salvador dispone de menos instrumentos de política para gestionar la crisis en comparación con países que mantienen una política monetaria independiente.[3][27][30]

La liberalización del comercio en el marco del CAFTA-DR generó un cambio de 834 millones de dólares en la balanza comercial bilateral a favor de Estados Unidos entre 2005 y 2014.[2] Los subsidios agrícolas estadounidenses para granos y otros cultivos perjudican a los agricultores salvadoreños, mientras que las empresas estadounidenses dominan los sectores de la confección y la manufactura en los que El Salvador sí mantiene competitividad en las exportaciones.[2] El resultado es que los salvadoreños rurales enfrentan una disminución de los ingresos provenientes de la producción agrícola y se ven presionados a migrar a zonas urbanas o a Estados Unidos. Las remesas de los salvadoreños en el extranjero constituyen ahora una parte sustancial del ingreso nacional y son fundamentales para la supervivencia de cientos de miles de hogares salvadoreños.[27][29]

La desigualdad en El Salvador se ha mantenido obstinadamente alta durante todo el período de posguerra a pesar del crecimiento económico. El 10 por ciento más rico de la población capta una proporción desproporcionada del crecimiento de los ingresos, mientras que el 50 por ciento más pobre ha experimentado ingresos reales estancados o en descenso.[21][27] La desigualdad de la tierra, arraigada en patrones históricos establecidos cuando las tierras comunales fueron expropiadas y consolidadas en grandes propiedades en el

En las décadas de 1870 y 1880, no se vio alterada fundamentalmente por los programas de reforma agraria posteriores a la guerra civil.[15][18][28] Aproximadamente el 25 por ciento de las tierras agrícolas cambiaron de manos a través del programa de transferencia de tierras entre 1980 y 1998, pero las tierras transferidas a menudo eran marginales y muchos beneficiarios carecían del capital, el acceso al crédito y el apoyo técnico para hacerlas productivas.[15][18][28]

## Consecuencias políticas: Espacio democrático limitado e intereses de las élites

Las políticas estadounidenses hacia El Salvador han priorizado sistemáticamente el orden y la alineación estratégica sobre el desarrollo democrático. El reconocimiento de Martínez tras La Matanza en 1932 estableció que Estados Unidos apoyaría la represión brutal de los movimientos populares cuando lo considerara necesario para prevenir la influencia comunista.[16][55] A lo largo de la Guerra Fría, Estados Unidos brindó apoyo diplomático y asistencia militar a una sucesión de gobiernos militares autoritarios que reprimieron la organización política, los movimientos obreros y los partidos políticos de izquierda.[4][14]

La transición posterior a la guerra civil, si bien formalmente democrática al establecer elecciones y competencia multipartidista, se produjo dentro de las limitaciones impuestas por la política estadounidense. Estados Unidos participó activamente en las negociaciones de paz y proporcionó recursos sustanciales para la reconstrucción posterior al conflicto, pero estos recursos vinieron con condiciones y directrices del Banco Mundial, el FMI y los programas de asistencia bilateral de Estados Unidos que moldearon la estructura del Estado de posguerra.[28][38] El programa de transferencia de tierras, destinado a abordar la desigualdad y apoyar a los beneficiarios del FMLN, se vio limitado por la resistencia de las élites y la presión estadounidense para implementarlo de maneras que no desafiaran fundamentalmente a la oligarquía terrateniente.[15][18][28] Cuando se redactó la nueva constitución de 1983, el límite de propiedad de tierras se fijó en 245 hectáreas en lugar de la propuesta original de 100 hectáreas, protegiendo así a la mayoría de las grandes plantaciones.[15][18]

El FMLN, transformado de ejército guerrillero a partido político a través del proceso de paz, se benefició inicialmente del apoyo campesino y obrero y de su asociación con la lucha popular.[50][51] Sin embargo, la integración del partido en la democracia representativa y su participación en el gobierno entre 2009 y 2019 se produjo dentro de las limitaciones del modelo económico neoliberal promovido por Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales.[50][51] El gobierno del FMLN bajo Mauricio Funes (2009-2014) mantuvo la moneda dolarizada, el régimen comercial CAFTA-DR y la privatización de los servicios sociales en lugar de impulsar las políticas redistributivas que deseaba su base popular.[50][51] Esta dinámica contribuyó a la erosión de la popularidad del FMLN y al éxito electoral de la candidatura antisistema de Bukele en 2019.

La política estadounidense contemporánea hacia el régimen cada vez más autoritario de Bukele representa una continuación del patrón establecido en 1932: la priorización del orden estratégico y los intereses estadounidenses por encima de la gobernanza democrática.

A pesar de los abusos documentados contra los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, las purgas judiciales y el retroceso democrático, la administración Trump ha intensificado la cooperación en materia de seguridad con el gobierno de Bukele y lo ha presentado como un líder eficaz en la lucha contra el crimen. Los conflictos internos de la embajada estadounidense sobre cómo responder al autoritarismo de Bukele, y la aparente influencia de funcionarios de la era Trump que mantienen estrechas relaciones con él, sugieren que fuerzas institucionales dentro del gobierno estadounidense favorecen la continuidad de la alineación con Bukele a pesar de su erosión democrática.[31]

## Consecuencias militares y de seguridad: entrenamiento, capacidad y derechos humanos

La asistencia militar de Estados Unidos a El Salvador, particularmente durante el período de guerra civil de 1980-1992, resultó en el entrenamiento de unidades militares responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. El Batallón Atlácatl, entrenado por asesores militares estadounidenses y armado con armamento estadounidense, se hizo tristemente célebre por cometer algunas de las peores atrocidades de la guerra, incluyendo la masacre de El Mozote.[10][19][43][44][46] La Comisión de la Verdad determinó que 85

El porcentaje de violaciones documentadas de derechos humanos fueron perpetradas por agentes estatales o escuadrones de la muerte aliados con las fuerzas armadas, fuerzas equipadas y entrenadas por los Estados Unidos.[10][19][26][45]

Los programas de entrenamiento militar estadounidenses incorporaron la doctrina estadounidense de contrainsurgencia, haciendo hincapié en el control de la población, las técnicas de interrogatorio y la proyección de fuerza. Estas doctrinas fueron aplicadas por el ejército salvadoreño de manera que se trató a la población civil como potenciales combatientes o simpatizantes de la guerrilla, justificando así su ataque y asesinato.[1][47] La magnitud de las bajas civiles —con estimaciones que oscilan entre 75 000 y 100 000 muertes en doce años— refleja tanto la intensidad del conflicto como la aplicación de una doctrina de contrainsurgencia que desdibujó las distinciones entre combatientes y civiles.

Después de la guerra civil, las fuerzas de seguridad salvadoreñas fueron reformadas a través de procesos supervisados por la ONU, pero muchos oficiales militares y policiales implicados en violaciones de derechos humanos permanecieron impunes debido a leyes de amnistía.[28][39][45] La brecha entre las violaciones de derechos humanos reconocidas y la rendición de cuentas reforzó la impunidad y limitó el desarrollo de un verdadero estado de derecho.

La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y El Salvador bajo el mandato de Bukele se centra en la represión de pandillas, el control migratorio y las operaciones antidrogas. La administración Trump ha brindado apoyo a la estrategia de encarcelamiento masivo de Bukele a pesar de los informes documentados de tortura, violaciones del debido proceso y condiciones carcelarias inhumanas en instalaciones como CECOT.[10][31][57] El acuerdo de Estados Unidos para deportar a migrantes no salvadoreños a El Salvador, al tiempo que proporciona 15 millones de dólares para apoyar los centros de detención de Bukele, convierte a Estados Unidos en cómplice de cualquier violación de derechos humanos que pueda ocurrir en dichas instalaciones.

## Consecuencias sociales: Migración, desplazamiento y la internacionalización de los salvadoreños Comunidades

Quizás la consecuencia contemporánea más visible de un siglo de políticas estadounidenses hacia El Salvador sea la migración masiva de salvadoreños a Estados Unidos. Durante la guerra civil de la década de 1980, aproximadamente 500 000 salvadoreños huyeron a Estados Unidos; sin embargo, solo el 2 % de las solicitudes de asilo fueron aprobadas.[10][21][26] La política de negar asilo a los salvadoreños que huían de la violencia militar respaldada por Estados Unidos representó una contradicción que finalmente se abordó parcialmente mediante la creación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en 1990, que brindó protección temporal a los salvadoreños sin exigirles que demostraran persecución.[10][21][26] A noviembre de 2022, aproximadamente 190 900 salvadoreños contaban con la protección del TPS, aunque esta protección ha sido amenazada repetidamente con su cancelación.[33]

La migración desde El Salvador continuó y se aceleró después de la guerra civil, impulsada por la violencia de pandillas, las dificultades económicas resultantes de la liberalización del comercio y el declive agrícola, los desastres naturales y las limitadas oportunidades económicas.[21][33][34][36] La administración Trump puso fin a las protecciones del TPS para los salvadoreños en 2018, lo que obligó a cientos de miles a elegir entre permanecer en los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados o regresar a un país donde muchos no tenían vínculos familiares y enfrentaban una posible violencia.[21][33]

La transformación de El Salvador, de un país de migrantes internos que buscaban trabajo en zonas urbanas a un importante país de origen de migrantes internacionales hacia Estados Unidos, ha dado lugar a comunidades de la diáspora centroamericana en Estados Unidos con fuertes vínculos transnacionales.[33] Las comunidades salvadoreñas en ciudades como Los Ángeles, Washington D.C., Houston y otras ciudades estadounidenses han creado estructuras institucionales, organizaciones culturales y grupos políticos centrados en cuestiones centroamericanas. Sin embargo, esta internacionalización de la población salvadoreña —con un estimado de 3,8 millones de centroamericanos viviendo en Estados Unidos en 2021, de los cuales los salvadoreños representan una parte significativa— también ha significado que muchos salvadoreños se hayan separado de sus familiares, enfrenten una situación legal precaria y explotación laboral, y mantengan relaciones transnacionales vulnerables a los cambios en las políticas estadounidenses.

La creación de estructuras de pandillas a través de la política de deportación de EE. UU. representa quizás la consecuencia más trágica e involuntaria de las políticas estadounidenses hacia El Salvador. Las deportaciones de pandillas estadounidenses que comenzaron en 1996 establecieron la presencia de MS-13 y la pandilla Calle 18 en El Salvador, donde estas organizaciones se expandieron drásticamente y se convirtieron en importantes impulsoras de violencia, homicidios, extorsión y perturbación económica.<sup>[10][19][32][51][54]</sup> El resultado ha sido que El Salvador experimentó la tasa de homicidios más alta del mundo durante gran parte de la década de 2010, con patrones de violencia directamente atribuibles a la presencia de pandillas que se originaron a partir de las políticas de deportación de EE. UU.<sup>[10][19][32]</sup>

---

## Conclusión: Un siglo de compromiso estratégico y consecuencias estructurales.

El análisis de las políticas de Estados Unidos hacia El Salvador a lo largo del siglo comprendido entre 1926 y 2026 revela un patrón constante de intervención estratégica diseñada para proteger y promover los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses, a menudo con un costo significativo para el desarrollo democrático, la autonomía económica y la estabilidad social de El Salvador.

El uso inicial por parte de Estados Unidos del reconocimiento y el no reconocimiento diplomático como herramientas políticas en la década de 1930 sentó precedentes para priorizar el orden estratégico sobre los principios democráticos. La intensificación de la ayuda y el entrenamiento militar durante la Guerra Fría, que se aceleró drásticamente durante la guerra civil de 1980-1992, resultó en la creación de fuerzas militares responsables de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo numerosas bajas civiles. La promoción posterior a la guerra de la liberalización comercial, la privatización y la dolarización ha restringido sistemáticamente la autonomía de la política económica de El Salvador, al tiempo que ha integrado al país cada vez más profundamente en relaciones de dependencia con los mercados estadounidenses y las finanzas basadas en el dólar. Las políticas de deportación estadounidenses, iniciadas en 1996, si bien se basan en la justicia penal interna más que en la política exterior, han tenido profundos efectos desestabilizadores en El Salvador al facilitar el establecimiento de redes de pandillas transnacionales.

La actual relación de Estados Unidos con la administración Bukele, cada vez más autoritaria, sugiere una continuación de patrones históricos, en los que se prioriza la cooperación en materia de seguridad y la alineación estratégica por encima de las preocupaciones por la gobernanza democrática.

La ironía de esta historia radica en que muchas de las crisis que actualmente justifican una mayor intervención estadounidense en El Salvador —violencia de pandillas, migración, inestabilidad económica, retroceso democrático— son, a su vez, producto de decisiones políticas estadounidenses previas. Estados Unidos no creó las desigualdades fundamentales ni los patrones históricos de autoritarismo en El Salvador, pero sus políticas han reforzado sistemáticamente, en lugar de cuestionar, esas estructuras subyacentes. Era posible un camino diferente: Estados Unidos podría haber priorizado el desarrollo democrático, la redistribución de tierras y el crecimiento económico incluso en El Salvador. En cambio, en cada momento crucial del último siglo, los responsables políticos estadounidenses optaron por políticas diseñadas para preservar la distribución existente de poder y riqueza, protegiendo al mismo tiempo los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Para comprender El Salvador es necesario reconocer cómo cien años de política estadounidense han limitado las posibilidades futuras del país. El gobierno autoritario de la actual administración de Bukele se desarrolla dentro de las limitaciones creadas por decisiones previas de Estados Unidos: la decisión de dolarizar eliminó la autonomía de la política monetaria; el régimen comercial CAFTA-DR ha estructurado la economía en torno a la agricultura de exportación y la manufactura de bajos salarios; las pandillas establecidas a través de las políticas de deportación estadounidenses impulsan la violencia; y millones de salvadoreños viven como migrantes internacionales o miembros de la diáspora con un estatus legal precario. Estas no son características inevitables de la geografía o la cultura salvadoreñas, sino más bien productos de decisiones políticas deliberadas tomadas por Estados Unidos en busca de objetivos estratégicos. Reconocer esta historia es el primer paso para desarrollar enfoques alternativos que puedan priorizar el desarrollo a largo plazo y la estabilidad democrática de El Salvador en lugar de la ventaja estratégica inmediata de Estados Unidos. Los próximos cien años de relaciones entre Estados Unidos y El Salvador no estarán determinados por la inevitabilidad histórica, sino por decisiones conscientes sobre si Estados Unidos...

Continuar priorizando el orden estratégico y la ventaja económica por encima del apoyo genuino a la autonomía, la democracia y el desarrollo de El Salvador.

---

## Referencias y documentación fuente

- [1] Archivo de Seguridad Nacional: El Salvador: Guerra, Paz y Derechos Humanos, 1980-1994 - Contiene 1.384 registros gubernamentales estadounidenses desclasificados del Departamento de Estado, la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa que documentan la política estadounidense durante el período de la guerra civil, incluidos materiales sobre escuadrones de la muerte, abusos de derechos humanos y participación militar estadounidense.
- [2] Análisis del impacto comercial del CAFTA-DR: documenta el aumento del superávit comercial de EE. UU. con El Salvador de -\$204 millones (2005) a \$630 millones (2014), mostrando la asimetría comercial y los impactos en la agricultura salvadoreña.
- [3] FMI: La dolarización oficial como régimen monetario: sus efectos en El Salvador - Analiza los efectos de la dolarización en la transmisión de la política monetaria, las tasas de interés y la estabilización macroeconómica, encontrando una autonomía reducida de la política monetaria.
- [4] Wikipedia: Guerra Civil Salvadoreña - Descripción general completa de la guerra civil que incluye volúmenes de ayuda militar y económica de EE. UU., programas de entrenamiento y contexto de derechos humanos.
- [5] KPMG: Marco de comercio recíproco entre Estados Unidos y El Salvador - Detalles del marco del acuerdo comercial recíproco 2025-2026 entre EE. UU. y El Salvador.
- [8] Americas Society/Council of the Americas: Seguimiento de Trump y América Latina - Cobertura de las políticas de control migratorio de la administración Trump que afectan a los centroamericanos, incluido El Salvador.
- [9] Archivo: Suministros militares estadounidenses al régimen salvadoreño: documentación detallada de las cantidades de ayuda militar estadounidense y los programas de capacitación desde 1950 hasta la década de 1980.
- [10] Blog de Immigration Lab/Aula: Estados Unidos ayudó a destruir El Salvador: análisis de la ayuda militar estadounidense durante la guerra civil, la masacre de El Mozote, las deportaciones de pandillas y la participación contemporánea de Bukele.
- [13] Embajada de EE. UU. en El Salvador: Historia de las relaciones entre EE. UU. y El Salvador - Historia oficial del gobierno de EE. UU. sobre las relaciones diplomáticas, incluido el período de no reconocimiento de 1931-1934 y el establecimiento de relaciones en 1863.
- [14] Archivo Estadounidense de Radiodifusión Pública: Guerra Civil de El Salvador - Cobertura documental de la guerra civil salvadoreña y debates sobre la política estadounidense, incluyendo el asesinato del arzobispo Romero y la elección de José Duarte.
- [15] PDF: El Salvador - Informe de país sobre derechos de propiedad y tierras - Análisis del programa de reforma agraria de la década de 1980, desafíos de implementación y redistribución limitada de tierras productivas.
- [16] JSTOR: La diplomacia estadounidense y la revolución salvadoreña de 1931: análisis académico de la política de no reconocimiento de Estados Unidos y su reversión con respecto al general Martínez.
- [18] PDF: Lecciones aprendidas de la Revolución Agraria Incumplida de El Salvador: análisis detallado de tres fases de la reforma agraria de la década de 1980 y por qué la Fase II nunca se implementó.
- [19] Blog de Immigration Lab/Aula: Estados Unidos ayudó a destruir El Salvador (cita repetida): análisis exhaustivo de la participación de Estados Unidos en la guerra civil y los impactos políticos contemporáneos.
- [21] Instituto de Políticas Migratorias: El Salvador: Guerra civil, desastres naturales y violencia de pandillas impulsan la migración

- Documenta los patrones migratorios desde El Salvador, el impacto de las políticas de asilo y la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS).

[22] Proyecto de historias personales: Intervención de EE. UU. en El Salvador - Cronología de la ayuda militar de EE. UU. (1 millón de dólares por día = 6 mil millones de dólares en total durante la década de 1980).

[25] Departamento de Justicia: El Salvador - Resumen oficial del gobierno de EE. UU. sobre la economía de El Salvador, la ratificación del CAFTA-DR y los programas de ayuda de EE. UU.

[26] Aulablog: Estados Unidos ayudó a destruir El Salvador (cita repetida) - Documentación adicional sobre las consecuencias de la guerra civil y la política de asilo.

[27] CORE: Los efectos de las remesas y la dolarización en El Salvador - Análisis de la decisión de dolarización, los flujos de remesas y los impactos de la política económica.

[28] Banco Mundial: Reconstrucción posterior al conflicto: El Salvador - Evaluación del Banco Mundial de los programas de asistencia y ajuste estructural posteriores al conflicto.

[29] USAID: Resumen de programas en Centroamérica y México - Resumen de la asistencia de USAID para El Salvador, incluyendo la reconstrucción tras el terremoto y los programas democráticos.

[30] FMI: La dolarización oficial como régimen monetario (cita repetida) - Análisis técnico de los efectos de la dolarización en la transmisión monetaria.

[31] ProPublica: Cómo un embajador estadounidense presuntamente protegió al presidente Bukele - Investigación de las relaciones de la embajada estadounidense con Bukele y las preocupaciones democráticas.

[32] Vox Development: El impacto de la política de deportación de EE. UU. en la actividad de pandillas en El Salvador: investigación que documenta el vínculo causal entre las deportaciones de EE. UU. y la escalada de violencia de pandillas.

[33] Migration Policy Institute: Inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos: datos sobre la población centroamericana en los EE. UU., designaciones de TPS y tendencias migratorias.

[34] Servicio de Investigación del Congreso: El Salvador: Asuntos actuales y relaciones con Estados Unidos - Panorama general de la política actual, incluidas las preocupaciones de la administración Bukele y las relaciones con Estados Unidos.

[35] Human Rights Watch: Deportados al peligro: documentación de los riesgos de la política de deportación de EE. UU., incluidos los asesinatos relacionados con pandillas y la violencia estatal contra los deportados.

[36] Servicio de Investigación del Congreso: Migración centroamericana: causas fundamentales y política estadounidense - Análisis de los factores que impulsan la migración y las respuestas políticas de Estados Unidos.

[37] EBSCO Research Starters: Política del Buen Vecino - Descripción general de la Política del Buen Vecino de Roosevelt, incluidos los principios de no intervención.

[38] Documento del Banco Mundial: Evaluación de la asistencia al país de El Salvador - Evaluación del Banco Mundial de la estrategia de asistencia 1989-2000 que incluye la liberalización del comercio y el ajuste estructural.

[39] Amnistía Internacional: El Salvador - Observaciones y recomendaciones sobre la Comisión de la Verdad - Recomendaciones de Amnistía Internacional para la Comisión de la Verdad, incluyendo la investigación de los escuadrones de la muerte y las violaciones de los derechos humanos.

[40] Wikipedia: Política del Buen Vecino - Descripción general completa de la Política del Buen Vecino, incluidos los impactos en Centroamérica.

- [41] FMI: América Central - Ajuste y reformas en la década de 1990 - Análisis de las políticas de ajuste macroeconómico, liberalización comercial y privatización en América Central, incluido El Salvador.
- [43] Proyecto Educativo Zinn: Masacre de El Mozote en El Salvador - Relato histórico de la masacre de El Mozote y el entrenamiento estadounidense del Batallón Atlacatl.
- [44] Universidad de Washington: Cables de la Embajada de EE. UU. recientemente desclasificados sobre el juicio de la masacre de El Mozote - Análisis de documentos desclasificados que muestran el conocimiento y la posible presencia de EE. UU. durante El Mozote masacre.
- [45] Escuela de las Américas Watch: Resumen del Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 sobre El Salvador: conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre escuadrones de la muerte, responsabilidad militar y sanciones recomendadas.
- [46] Wikipedia: Masacre de El Mozote - Relato detallado de la masacre que incluye entrenamiento militar estadounidense, posible presencia estadounidense y estimaciones del número de muertos.
- [47] Archivo de Seguridad Nacional: El Salvador: Guerra, Paz y Derechos Humanos, 1980-1994 (cita repetida) - Documentos desclasificados sobre escuadrones de la muerte y conocimiento de Estados Unidos sobre violaciones de derechos humanos.
- [48] USIP: De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador - Informe final de la Comisión de la Verdad de la ONU que documenta las violaciones de los derechos humanos.
- [49] Archivo de Internet de Acuerdos de Paz: Acuerdo de Chapultepec - Texto completo de los acuerdos de paz de 1992 que incluyen la reforma militar, la transferencia de tierras y las disposiciones democráticas.
- [50] Fundación Berghof: El FMLN y la política de posguerra en El Salvador - Análisis de la transición del FMLN de fuerza guerrillera a partido político y desafíos de gobernanza.
- [51] Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de FIU: El nuevo rostro de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador - Investigación sobre las estructuras, la organización y la historia de las pandillas, incluidos los impactos de las deportaciones en EE. UU.
- [52] Revista de la Democracia: Documentos sobre la Democracia - Discursos de la ceremonia de firma del Acuerdo de Paz de Chapultepec de 1992.
- [54] National Geographic: Dentro de la lucha de El Salvador contra la violencia, la pobreza y la política estadounidense: reportajes de investigación sobre la violencia de pandillas, las deportaciones y los impactos de la política estadounidense.
- [55] Publicaciones académicas de la Universidad de Leiden: El Servicio Exterior estadounidense y los dictadores de Centroamérica: análisis académico de la diplomacia estadounidense y la política de no reconocimiento de Martínez 1931-1934.
- [57] Proyecto de erosión democrática: el autoritarismo encubierto exitoso de El Salvador - Análisis del retroceso democrático de Bukele y las tácticas de consolidación autoritaria.
- [60] Freedom House: El Salvador: Libertad en el mundo 2025 - Evaluación contemporánea de los derechos humanos y las libertades democráticas en El Salvador.